

Seguridad en medio de la confrontación

Aunque las amenazas contra candidatos han disminuido con relación al año pasado, según el Gobierno, el reto es garantizarles seguridad a los candidatos y a los ciudadanos en medio de la confrontación. La Fuerza Pública, como detentador legítimo del monopolio de la fuerza, tiene el gran desafío de asegurar el cumplimiento de las elecciones de una manera tranquila y libre.

El pasado 7 de julio, al salir de su sede política, fue asesinado el aspirante al concejo del municipio de Sevilla, Valle, Antonio Colorado Martínez, un político del movimiento Cambio Radical que trabajaba esa noche para liderar la gira de su candidato a la Gobernación del Valle. La muerte tomó por sorpresa a la región y a los políticos, que pidieron mayores garantías durante el proceso electoral.

A este hecho se suman los informes de diferentes campañas políticas y de medios de comunicación sobre las amenazas a candidatos a las corporaciones públicas que se elegirán el próximo 28 de octubre. El pasado 10 de junio, por ejemplo, el periódico El Tiempo reveló amenazas contra candidatos en ocho zonas del país, entre ellos Antioquia, Cesar, Sucre, Córdoba, Valle, Caldas, Risaralda y Caquetá.

En Meta el Partido Conservador retiró sus candidatos después del asesinato de un aspirante a la Asamblea; en Caquetá fue asesinado un candidato a alcaldía y se han denunciado atentados contra personas cercanas a las campañas políticas; en Sucre, dos aspirantes a diferentes alcaldías recibieron amenazas; en Caldas y Risaralda los líderes políticos han afirmado que están recibiendo presiones de ex paramilitares o de grupos que no se desmovilizaron. Y en Valle, un candidato al Concejo fue asesinado y un aspirante a la Alcaldía fue víctima de un atentado, quien poco después reveló: "tenemos que hacer campaña máximo hasta las 8 de la noche y vivir bajo estrictas medidas de seguridad".

"Las amenazas contra candidatos a cargos de elección popular se han reducido en un 54% en lo corrido del año, en relación con el mismo período correspondiente a las elecciones de mayo de 2006", afirmó el Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, quien al mismo tiempo reconoció que existen problemas en algunas zonas del país. Los departamentos más afectados por la presión de los grupos armados al margen de la ley continúan siendo Caquetá, Putumayo, Nariño, Córdoba y Arauca, según el director del DAS, Andrés Peñate.



La presencia de la fuerza pública busca garantizar que éstas sean unas elecciones tranquilas.

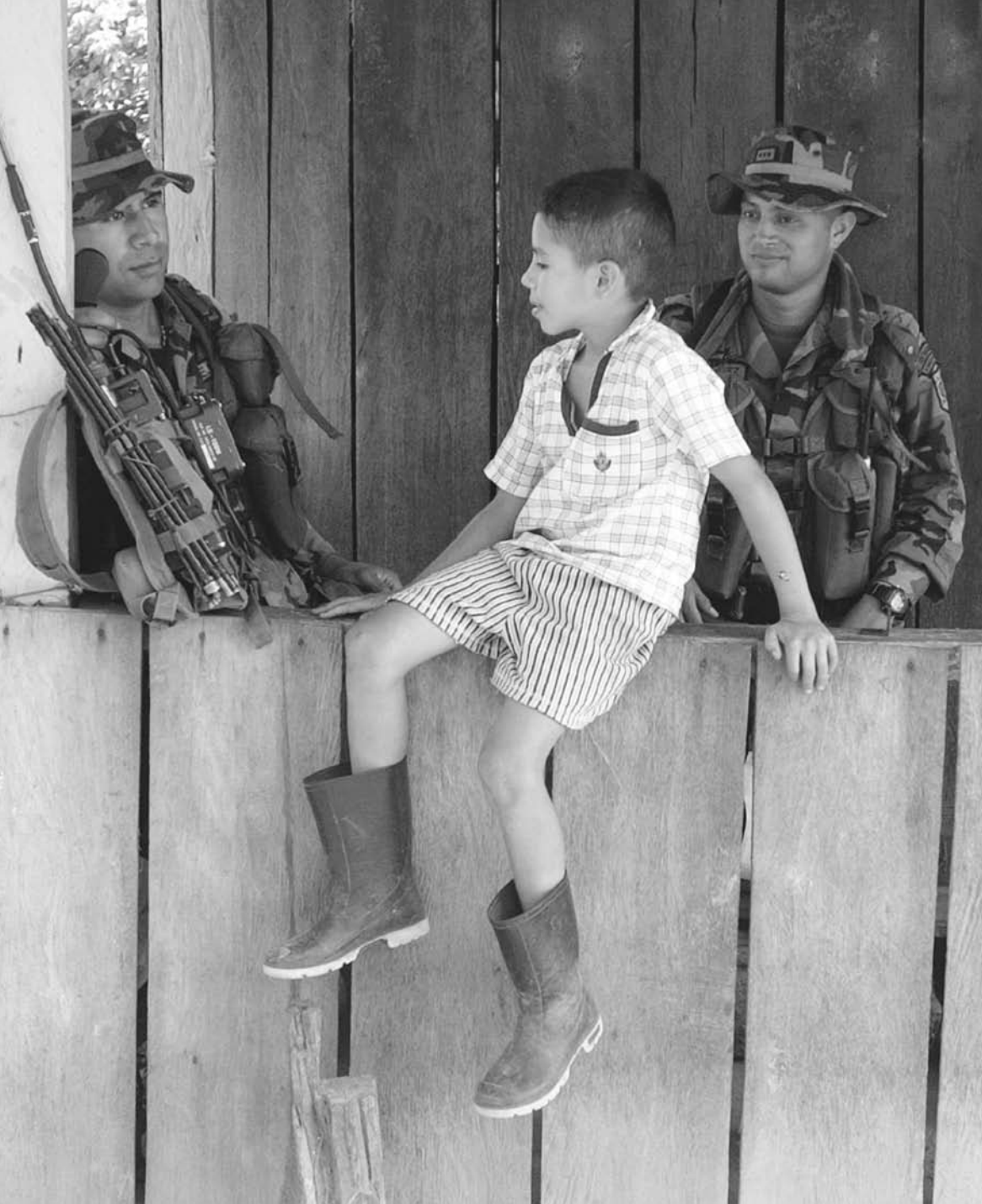
Este panorama ha evidenciado la presión que están ejerciendo grupos armados ilegales con miras a los comicios de octubre y, al mismo tiempo, el reto que el Estado enfrenta para garantizarles seguridad a los candidatos y también a los ciudadanos.

SEGURIDAD ¿PARA QUIÉN?

De acuerdo con los analistas, hay tres temas importantes a la hora de examinar los aspectos de la seguridad:

Seguridad de candidatos. El principal tema de seguridad frente a los candidatos es que puedan hacer campaña libremente en todas las regiones del país y que se eliminen o por lo menos se mitiguen sus riesgos, plantea la analista Claudia López.

Seguridad de los ciudadanos. El tema de seguridad pasa por garantizarles a los ciudadanos el derecho al voto y que la población tenga garantías para salir a votar de forma libre y voluntaria. En ese sentido, el Estado debe ga-



© Cortesía Claudia Rubio

Las Fuerzas Militares aseguran que garantizarán la seguridad en las próximas elecciones.

garantizar ese derecho incluso cuando debe trasladar una mesa de votación de una vereda a una cabecera municipal por razones de seguridad.

Presencia de Fuerza Pública. Es importante su presencia en cada municipio, así como atacar militarmente tanto a la guerrilla como al paramilitarismo. "Si el Estado no hace presencia en el territorio, la ilegalidad es quien ejerce control y se convierte en el proveedor de seguridad", afirma la analista Claudia López. Y ese control lo ejercen de diferentes formas. Así, por ejemplo, la tradición electoral ha revelado que en muchas partes del sur del país los candidatos no pueden hacer campaña porque están amenazados por la guerrilla y mientras allí la subversión busca evitar que se vote, en el norte del país se obliga a votar, como lo hicieron los paramilitares para favorecer a sus candidatos. Los mapas electorales también han mostrado que en algunos casos los niveles de abstención son muy bajos y en otros, se encuentra un alto número de votos nulos o en blanco como reacción a haber sido obligados a votar.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

"No permitiré que la guerrilla en unas regiones o los paramilitares, en otras, interfieran en las elecciones de octubre próximo", dijo el presidente Álvaro Uribe en un Consejo de Seguridad, en San Vicente del Caguán, y pidió tener mucho cuidado para que los grupos armados al margen de la ley no vayan a influir en las elecciones por medio de candidatos o de organizaciones.

Precisamente, para hacer frente a las elecciones, las Fuerzas Militares pusieron en marcha el Plan Democracia, con el propósito de garantizar

que los candidatos cuenten con todas las garantías de seguridad para hacer campaña libremente.

La Policía Nacional ya tiene un mapa que le indica dónde pueden presentarse problemas de seguridad ante la presencia de ilegales.

En el marco del Centro Integrado de Inteligencia Electoral (CI2E) se realizan análisis para definir zonas de riesgo, en las que se adoptarán medidas para evitar cualquier acto de violencia o delictivo en contra de candidatos, precandidatos, líderes políticos, autoridades territoriales y la ciudadanía en general, afirmó el director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo.

Según Naranjo, la protección se realizará en los siguientes niveles:

- Seguridad de los candidatos: se tendrá en cuenta el análisis del nivel de riesgo y las medidas de protección personal. El director de la Policía sostuvo que la institución realizará "las coordinaciones y acciones interinstitucionales pertinentes para el desarrollo de estudios técnicos de nivel de riesgo y grado de amenaza de los candidatos y precandidatos".

- Seguridad de las sedes políticas: estará a cargo de la Policía Nacional previo estudio de riesgo.

- Seguridad de los comicios: la Fuerza Pública y los organismos de seguridad desplegarán actividades de inteligencia y protección en el país. 420 mil hombres cuidarán los comicios en todo el país, entre miembros de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

- Red alterna de comunicaciones: habrá

un plan de contingencia de comunicaciones que permita reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia.

- Seguridad y libertad de los electores: estipula medidas de seguridad para garantizar a los electores la libre circulación por el territorio nacional, los medios de transporte para que puedan acudir a votar y el voto libre y secreto en los cubículos de votación.

Teniendo en cuenta que es "misión fundamental de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad estatales preservar el ejercicio del derecho al sufragio, permitiendo a los ciudadanos ejercer el libre derecho a elegir a sus representantes", como lo señaló el general Naranjo, se estima que el cubrimiento de la Fuerza Pública en el territorio nacional sea del 100% en los puestos de votación.

A través de estos mecanismos el Estado busca garantizar a los electores participar en las elecciones de manera libre. Las autoridades, los analistas, los partidos políticos y la propia ciudadanía reconocen que la reducción de las amenazas es un indicador importante, pero saben que es un reto mucho más difícil de alcanzar y de medir que disminuyan las presiones sobre la población a la hora de votar. ▀

CIFRAS DE SEGURIDAD

Las amenazas contra candidatos se han reducido en un 54%.

Se estima que la Fuerza Pública tenga un cubrimiento del 100% en las elecciones.

420 mil hombres cuidarán las elecciones en todo el país entre Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea.